

1993

Distr.
GENERAL

E/CN.4/1994/30
20 de diciembre de

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

COMISION DE DERECHOS HUMANOS
50º período de sesiones
Tema 10 del programa provisional

CUESTION DE LOS DERECHOS HUMANOS DE TODAS LAS PERSONAS
SOMETIDAS A CUALQUIER FORMA DE DETENCION O PRISION

Detención de funcionarios internacionales y de sus familias

Informe actualizado del Secretario General, preparado de
conformidad
con la resolución 1993/39 de la Comisión de Derechos Humanos

INDICE

	<u>Párrafos</u>	<u>Página</u>
INTRODUCCION		1 - 203
I. ACONTECIMIENTOS RECIENTES	21 - 44	8
A. Medidas tomadas por el Consejo de Seguridad	21 - 238	
B. Medidas tomadas por el Secretario General	24 - 278	
C. Nota del Secretario General a la Asamblea General	28 - 44	10
II. CASOS RECIENTES	45 - 49	15

III.	MEDIDAS Y PROPUESTAS PARA PROMOVER EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS FUNCIONARIOS INTERNACIONALES, INCLUIDOS LOS QUE PRESTAN SERVICIO EN MISIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ . .	50 - 59	17
------	---	---------	----

GE.93-85919 (S)

INDICE (continuación)

Página

Anexos

I.	Lista consolidada de funcionarios arrestados y detenidos o desaparecidos respecto de los cuales las Naciones Unidas y los organismos especializados y organizaciones afines no han podido ejercer plenamente su derecho de protección	19
II.	Nueva Zelandia: Propuesta relativa a un proyecto de convención sobre la responsabilidad de los ataques contra el personal de las Naciones Unidas	24
III.	Ucrania: Proyecto de convención internacional sobre el y la seguridad del personal de las fuerzas de las Naciones Unidas y del personal civil asociado	30

INTRODUCCION

1. En 1987, la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías aprobó su resolución 1987/21, en la que expresó su profunda preocupación por el hecho de que todavía hubiera una cincuentena de funcionarios detenidos, encarcelados o que habían sido declarados desaparecidos -algunos de los cuales incluso habían fallecido en prisión- o que estaban retenidos en un país en contra de su voluntad. Consciente de que los derechos de los funcionarios de las Naciones Unidas merecían una atención particular a causa de la misión que se había confiado a la Organización en la esfera de los derechos humanos, la Subcomisión pidió al Secretario General que le presentara en su 40º período de sesiones un informe detallado sobre la situación de los funcionarios internacionales y sus familiares que estuvieran detenidos, encarcelados, desaparecidos o retenidos en un país contra su voluntad, a fin de poder examinar esos casos a la luz de los instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos.

2. En su 45º período de sesiones, la Comisión de Derechos Humanos aprobó la resolución 1989/28 sobre la cuestión. En esa resolución, la Comisión tomó nota del informe (E/CN.4/1989/19) del Secretario General, que era una versión actualizada del informe sobre la detención de funcionarios de las Naciones Unidas y de los organismos especializados presentado a la Subcomisión (E/CN.4/Sub.2/1988/17).

3. Desde entonces, después de examinar los diversos informes que le ha presentado el Secretario General, la Comisión le ha pedido a éste que prosiga sus esfuerzos para garantizar que los derechos humanos y las prerrogativas e inmunidades de los funcionarios y expertos de las Naciones Unidas y de sus familias se respeten plenamente y que le someta un informe actualizado sobre la situación de los funcionarios y sus familiares que estén detenidos, encarcelados, desaparecidos o retenidos en un país contra su voluntad, con inclusión de los casos que se hayan solucionado con éxito durante el año, así como sobre la aplicación de las medidas a que se hace referencia en los párrafos 3 y 4 de la resolución 1989/28 1/.

4. En su 48º período de sesiones, la Comisión aprobó su resolución 1992/26 en la que, entre otras cosas, pidió al Secretario General que continuase en sus esfuerzos para garantizar que los derechos humanos y los privilegios e inmunidades de los funcionarios y expertos de las Naciones Unidas y de sus familias se respetasen plenamente y para recabar reparación e indemnización por los perjuicios ocasionados a las víctimas de violaciones de los derechos humanos, privilegios e inmunidades, así como para lograr su plena reincorporación. También pidió de nuevo al Secretario General que presentase

/ Los informes presentados por el Secretario General figuran en los documentos E/CN.4/Sub.2/1988/17, E/CN.4/1989/19, E/CN.4/1990/14, E/CN.4/1991/18 y E/CN.4/1993/22.

a la Comisión, en su 49º período de sesiones, una versión actualizada del informe.

5. En su 49º período de sesiones, la Comisión, después de examinar el informe que figuraba en el documento E/CN.4/1993/22, aprobó la resolución 1993/39 en la que pedía al Secretario General una vez más que continuase sus esfuerzos en este sentido, y en particular pedía a las instancias que se ocupan en la actualidad de los derechos humanos, incluido el Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias, el Relator Especial sobre la cuestión de la tortura y el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, que examinasen los casos que afecten a los derechos humanos de los funcionarios del sistema de las Naciones Unidas y sus familias, así como de los expertos, los relatores especiales y los consultores, y que transmitiesen la parte pertinente de sus respectivos informes al Secretario General para que éste la incluyese en su informe a la Comisión de Derechos Humanos. También pedía al Secretario General que presentase a la Comisión en su 50º período de sesiones una versión actualizada del informe. Este informe se presenta atendiendo a esa petición.

6. Por su parte, la Subcomisión examinó en su 41º período de sesiones el informe preliminar (E/CN.4/Sub.2/1989/28), titulado "Protección de los derechos humanos de los funcionarios y expertos de las Naciones Unidas y de sus familias" presentado por la Sra. María Concepción Bautista de conformidad con su resolución 1988/9. La Subcomisión aprobó la resolución 1989/30, en la que invitó a la Sra. Bautista a continuar su estudio y a presentar a la Subcomisión, en su 42º período de sesiones, un informe con propuestas de medidas prácticas para mejorar el sistema actual y lograr que los funcionarios de las Naciones Unidas y de los organismos especializados estuviesen protegidos.

7. La Sra. Bautista presentó su informe actualizado (E/CN.4/Sub.2/1990/30) a la Subcomisión en su 42º período de sesiones. En la introducción, el informe contenía un examen analítico de los problemas en todas sus vertientes, incluidos los derechos legales de las Naciones Unidas en casos de detención o prisión de funcionarios.

8. De conformidad con la resolución 1990/20 de la Subcomisión, la Sra. Bautista pidió a los Gobiernos del Afganistán, el Chad, Etiopía, Israel, Jordania, Nepal, la República Árabe Siria y Somalia que le facilitaran toda la información y todas las observaciones que consideraran oportunas acerca de los funcionarios que, según los datos de que disponía, estaban detenidos en esos países. Solicitó también al Coordinador de Medidas de Seguridad de las Naciones Unidas y a los jefes de los organismos especializados y otras organizaciones intergubernamentales que le suministraran información sobre las violaciones de los derechos humanos de los funcionarios y de sus familias, así como sobre los casos resueltos y pendientes de tales violaciones, las medidas que se hubieran adoptado para prestarles asistencia y posibles sugerencias sobre la forma de evitar la repetición de tales incidentes. También se pidió información sobre las cuestiones a que se referían los párrafos 3 y 4 de la resolución 1989/30 de la Subcomisión.

9. En la misma resolución, se invitaba a la Sra. Bautista a presentar una versión definitiva del informe a la Subcomisión en su 43º período de sesiones. Habida cuenta, sin embargo, del hecho de que sólo se habían recibido escasas respuestas suplementarias, la Relatora Especial solicitó la autorización de la Subcomisión para aplazar la presentación del informe definitivo (véase E/CN.4/Sub.2/1991/23, párr. 12).

10. En su resolución 1991/17, la Subcomisión tomó nota con pesar del reducido número de respuestas que había recibido de los gobiernos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y pidió al Secretario General que multiplicase sus esfuerzos para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos y los privilegios e inmunidades de los funcionarios del sistema de las Naciones Unidas y sus familias, así como de los expertos y los consultores. La Subcomisión invitó a la Relatora Especial a que presentara en su 44º período de sesiones un informe definitivo que contuviera recomendaciones prácticas sobre medidas para mejorar a largo plazo la protección de los funcionarios del sistema de las Naciones Unidas y de sus familias, así como de los expertos y los consultores.

11. De conformidad con el párrafo 6 de la resolución 1991/17 de la Subcomisión, volvió a dirigir el 16 de diciembre de 1991 notas verbales y cartas a los gobiernos, Secretario General y a los jefes de las secretarías de los organismos internacionales solicitando información suplementaria. Se recibieron respuestas de los Gobiernos de Chile, China, Israel, Pakistán, República Árabe Siria y Sudán. También envió una contestación el Coordinador de Medidas de Seguridad de las Naciones Unidas. Además, se recibieron respuestas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Organización Meteorológica Mundial, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

12. La Relatora Especial presentó su informe definitivo (E/CN.4/Sub.2/1992/19) a la Subcomisión en su 44º período de sesiones, en agosto de 1992, y le incorporó una serie de recomendaciones que se reproducirán en otra parte del presente informe (E/CN.4/1993/22, sec. IV).

13. La Relatora Especial señaló que el hecho de que se presentase un informe definitivo no significaba en modo alguno que se hubiese llegado a una solución adecuada del problema. Observó que las administraciones de varias organizaciones del sistema de las Naciones Unidas habían adoptado medidas especiales para rehabilitar y reintegrar a algunos de los funcionarios cuyos derechos se habían vulnerado. Además, señaló que, a raíz del fallo del Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas N° 482 de 25 de mayo de 1990 relativo a la adscripción, se había ido recuperando gradualmente la confianza en el principio de la independencia de los funcionarios de la administración pública internacional y se habían reafirmado los principales enunciados en los Artículos 100 y 105 de la Carta.

14. Más tarde la Subcomisión aprobó su resolución 1992/24, en la que recomendaba a la Comisión de Derechos Humanos que solicitase a las instancias que se ocupen de los derechos humanos, incluido el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, el Relator Especial sobre la cuestión de la tortura y el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias que examinara los casos que afectan a los derechos humanos de los funcionarios del sistema de las Naciones Unidas y sus familias, así como de los expertos y consultores, y que transmitiese la parte pertinente de sus respectivos informes al Secretario General para que éste los incluyera en su informe a la Comisión de Derechos Humanos, en relación con el tema 10 de su programa.

15. La Subcomisión pidió asimismo al Secretario General que informase anualmente a la Tercera Comisión de la Asamblea General sobre la aplicación de medidas de protección y de reparación de posibles daños ocasionados.

16. La Asamblea General, en su resolución 45/240 de 21 de diciembre de 1990, tomó nota con profunda preocupación del informe del Secretario General (A/C.5/45/12 y Corr.1) y de los hechos que en él se señalaban, en particular el gran número de nuevos casos de arresto y detención y de los casos de los cuales ya se había informado. En la misma resolución la Asamblea General deploró el aumento de los casos en que la seguridad, la actuación y el bienestar de los funcionarios se habían visto afectados adversamente así como el número creciente de casos en que se habían visto amenazados la vida y el bienestar de los funcionarios en el desempeño de sus funciones oficiales. La Asamblea instó al Secretario General a que diese prioridad a la comunicación y el pronto seguimiento de los casos de arresto, detención y otras posibles cuestiones relacionadas con la seguridad y la debida actuación de los funcionarios de las Naciones Unidas y los organismos especializados y organizaciones afines.

17. Más tarde, el Secretario General presentó a la Asamblea General, en su cuadragésimo sexto período de sesiones, su informe titulado "Cuestiones relativas al personal: respeto de las prerrogativas e inmunidades de los funcionarios de las Naciones Unidas y los organismos especializados y organizaciones afines" (A/C.5/46/4). No obstante, con arreglo a la resolución 46/220 de la Asamblea General sobre la racionalización de los trabajos de la Quinta Comisión, la Asamblea decidió adoptar el método bienal para el examen de las cuestiones relativas al personal y no aprobó una resolución en su cuadragésimo sexto período de sesiones.

18. En consecuencia, el informe del Secretario General a la Asamblea General en su cuadragésimo séptimo período de sesiones (A/C.5/47/14) se presentó de conformidad con la misma resolución 45/240 de la Asamblea General, de 21 de diciembre de 1990. La Asamblea General también tuvo ante sí una nota del Secretario General que reproducía las opiniones de los representantes del personal de la Secretaría de las Naciones Unidas (A/C.5/47/20). La Asamblea aprobó la resolución 47/28 sobre esta cuestión, en la que pedía al Secretario General que adoptase todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad del personal de las Naciones Unidas, así como de los que participan en

operaciones de mantenimiento de la paz y operaciones de índole humanitaria. Recordaba a los países anfitriones que eran responsables de la seguridad de todo el personal de las Naciones Unidas que participa en operaciones de mantenimiento de la paz o que realiza otras actividades en su territorio. La Asamblea pedía asimismo al Secretario General que le siguiera presentando, en nombre del Comité Administrativo de Coordinación, informes relativos al respeto de las prerrogativas de inmunidades de los funcionarios de las Naciones Unidas y de los organismos especializados y organizaciones del sistema.

19. Habida cuenta de la preocupación expresada por los acontecimientos mencionados en el informe del Secretario General, la Asamblea General decidió en la reanudación de su cuadragésimo séptimo período de sesiones que, a pesar de su resolución anterior que disponía que las cuestiones relativas al personal fueran examinadas con arreglo a un ciclo bienal (resolución 46/220, de 20 de diciembre de 1991), se pidiera al Secretario General que presentase a la Asamblea, en su cuadragésimo octavo período de sesiones, información actualizada acerca de la situación de los funcionarios de las Naciones Unidas, con especial atención a las violaciones de las prerrogativas e inmunidades, teniendo en cuenta las resoluciones 45/240 de 21 de diciembre de 1990 y 47/28 de 25 de noviembre de 1992 (decisión 47/457 C de 8 de abril de 1993). Esta información, en una nota presentada por el Secretario General, figura en el documento A/C.5/48/5.

20. A la luz de los hechos mencionados y en cumplimiento de la resolución 1993/39 de la Comisión de Derechos Humanos, el presente informe describe los acontecimientos recientes relacionados con la situación de los funcionarios de las diversas secretarías de las Naciones Unidas en el capítulo I. En el capítulo II se describen los casos recibidos por el Secretario General de conformidad con el párrafo 9 de la resolución así como los casos aclarados recientemente. El capítulo III se concentra en las medidas y propuestas destinadas a promover el respeto de los derechos humanos de los funcionarios internacionales, incluidos los que prestan servicio en misiones de mantenimiento de la paz.

I. ACONTECIMIENTOS RECIENTES

A. Medidas tomadas por el Consejo de Seguridad

21. La protección de los funcionarios de las Naciones Unidas durante el último año ha revestido un aspecto diferente con el aumento de las operaciones de mantenimiento de la paz decididas por el Consejo de Seguridad. En el marco del "Programa de Paz del Secretario General, el Presidente del Consejo de Seguridad hizo una declaración (S/25493) en la que, entre otras cosas, recordó que había sido necesario en varias ocasiones condenar atentados cometidos contra las fuerzas y el personal de las Naciones Unidas. El Consejo consideró que la realización o la amenaza de ataques y otros actos de violencia, inclusive la obstrucción o detención de personas, dirigidos contra las fuerzas y el personal de las Naciones Unidas eran totalmente inaceptables y podían obligar al Consejo a adoptar otras medidas para garantizar la seguridad de dichas fuerzas y personal.

22. Además, el Consejo de Seguridad reiteró su petición de que los Estados y otras partes en los diversos conflictos tomaran todas las medidas posibles para garantizar la seguridad de las fuerzas y el personal de las Naciones Unidas. Pidió que los Estados actuaran con rapidez y eficacia para refrenar, enjuiciar y castigar a todos los responsables de ataques y otros actos de violencia contra dichas fuerzas y personal.

23. El Consejo de Seguridad pidió al Secretario General que informase lo antes posible sobre las disposiciones existentes para la protección de las fuerzas y el personal de las Naciones Unidas y sobre la eficacia de dichas disposiciones, teniendo en cuenta, entre otras cosas, los instrumentos multilaterales pertinentes y la situación de los acuerdos sobre utilización de fuerzas concertados entre las Naciones Unidas y los países huéspedes.

B. Medidas tomadas por el Secretario General

24. El Secretario General presentó un informe sobre la seguridad de las operaciones de las Naciones Unidas en relación con el examen amplio de toda la cuestión de las operaciones de mantenimiento de la paz en todos sus aspectos (A/48/349-S/26358). El Secretario General declaraba, entre otras cosas, que los principales acontecimientos nuevos se referían a las condiciones en que se espera que opere el personal de las Naciones Unidas y al grado de riesgo que se estima aceptable. Al cumplir las tareas que le confían los Estados Miembros, el personal de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas tiene que realizar cada vez más sus funciones en circunstancias sumamente peligrosas, en que las decisiones sobre su seguridad requieren una urgencia que por lo común no existía anteriormente. Esto se aplica sobre todo a las zonas en que la autoridad del gobierno no se ejerce debidamente o es totalmente inexistente. Mientras que, antes, el personal tenía su protección asegurada en virtud de su participación en la labor de las Naciones Unidas, no ocurre ya así. Por el contrario, el personal se encuentra cada vez más en peligro como consecuencia de esa participación. Además, las acciones de las Naciones Unidas en una parte del mundo pueden suponer amenazas para el

personal de las Naciones Unidas en otra. Como consecuencia, las bajas han aumentado. En 1992, resultaba muerto por término medio un funcionario al mes. En 1993, esa cifra ha sido hasta ahora de uno cada dos semanas. Hasta la fecha no se ha podido identificar y pedir responsabilidades a los causantes de esas muertes. La Organización no tiene estadísticas de las bajas del personal de las organizaciones no gubernamentales, pero al parecer también han aumentado. El personal militar tuvo 51 víctimas mortales en 1992 y 97 en la primera mitad de 1993.

25. En su nota a la Asamblea General (A/C.5/48/5), el Secretario General comentó a este respecto que, como resultado de esos acontecimientos, el umbral de seguridad aceptable se había elevado a un nivel inconcebible con anterioridad. Durante el período a que se refería el informe, los funcionarios habían sufrido ataques, heridas, secuestros abusos y hostigamiento en el desempeño de sus deberes. En su informe (A/48/349), el Secretario General añadió: "Los acuerdos sobre el estatuto de las fuerzas regulan las prerrogativas e inmunidades, derechos y servicios necesarios para las operaciones de las Naciones Unidas y para su personal civil y militar. Es pertinente observar que, en virtud de esos acuerdos, el gobierno de un país que recibe a una operación de mantenimiento de la paz se compromete a respetar el carácter exclusivamente internacional de esa operación y a garantizar el enjuiciamiento de las personas sometidas a su jurisdicción penal que sean acusadas de actos, en relación con las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y con su personal, que de haberse cometido en relación con las fuerzas del gobierno serían sancionables" (párr. 15).

26. Una característica nueva es la utilización por el Consejo de Seguridad de sus facultades de resguardo en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. Esto ha llevado a establecer operaciones de las Naciones Unidas no basadas en el consentimiento y la cooperación, que pueden encontrar una oposición abierta. Un ejemplo a este respecto es la situación en Somalia. A raíz de los ataques perpetrados contra las fuerzas de las operaciones de las Naciones Unidas en Somalia (UNOSOM II) el 5 de julio de 1993, en los que 25 soldados paquistaníes resultaron muertos y 10 desaparecidos, y se registraron 57 heridos (54 paquistaníes y 3 estadounidenses), el Consejo de Seguridad aprobó el 6 de junio de 1993 la resolución 837 (1993).

27. Posteriormente, el 29 de septiembre de 1993, el Consejo de Seguridad marcó un hito importante con la aprobación de la resolución 868 (1993), en la que declaró que al considerar el despliegue de nuevas operaciones de las Naciones Unidas autorizadas por el Consejo de Seguridad éste exigiría, entre otras cosas: a) que el país anfitrión adopte todas las medidas apropiadas para garantizar la seguridad de la operación y del personal que interviene en la operación; b) que los arreglos de seguridad adoptados por el país anfitrión se apliquen a todas las personas que intervienen en la operación; c) que se negocie sin demora un acuerdo sobre el estatuto de la operación y de todo el personal que interviene en la operación en el país anfitrión, y que este acuerdo entre en vigor lo antes posible después del comienzo de la operación. El 24 de noviembre de 1993, el Secretario General designó una Comisión de Encuesta para investigar los mencionados ataques armados. Esta medida fue

autorizada por la resolución 885 (1993) del Consejo de Seguridad, de 16 de noviembre, con el fin de promover la aplicación de sus anteriores resoluciones sobre esta cuestión.

C. Nota del Secretario General a la Asamblea General

28. La nota del Secretario General (A/C.5/48/5) se refería al período de julio de 1992 al 30 de junio de 1993. El Secretario General expresaba su particular preocupación por el hecho de que, desde principios de 1992, hubiesen perdido la vida 28 funcionarios pertenecientes a diferentes organizaciones. Se habían señalado a la atención de la Asamblea General en su cuadragésimo séptimo período de sesiones 11 de esos casos en que había habido pérdidas de vidas (A/C.5/47/14). Hasta la fecha de la publicación del informe, habían muerto los 17 funcionarios de las Naciones Unidas que se indican a continuación: el Sr. Sean Devereux (UNICEF), nacional de Irlanda, muerto en Somalia el 2 de enero de 1993; el Sr. Anthony Bullard (CNUAH), nacional del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, muerto en el Afganistán el 1º de febrero de 1993; el Sr. Abdul Hadi (OACNUR), nacional del Afganistán, muerto en el Afganistán el 1º de febrero de 1993; el Sr. Zia Ul-Haq (CNUAH), nacional del Afganistán, muerto en el Afganistán el 1º de febrero de 1993; el Sr. Awad Ali Suradi (OOPS), palestino, muerto en el territorio ocupado de la faja de Gaza el 23 de febrero de 1993; el Sr. Pedro Shivinda (PMA), nacional de Angola, muerto en Angola el 24 de febrero de 1993; el Sr. Nestrendo (PMA), nacional de Angola, muerto en Angola el 24 de febrero de 1993; el Dr. Z. S. Rao (FAO), nacional de la India, muerto en la India el 12 de marzo de 1993; el Sr. Mohamed Rouf (APRONUC), nacional de Bangladesh, muerto en Camboya el 29 de marzo de 1993; el Sr. Sophorn Choun (APRONUC), nacional de Camboya, muerto en Camboya el 3 de abril de 1993; el Sr. Sok Phiep Lay (APRONUC), nacional de Camboya, muerto en Camboya el 8 de abril de 1993; el Sr. Atsuhito Nakata (Voluntario de las Naciones Unidas), nacional del Japón, muerto en Camboya el 8 de abril de 1993; el Sr. Khhough Ngim (APRONUC), nacional de Camboya, muerto en Camboya el 7 de abril de 1993; el Sr. Yousif Al-Gharib (OOPS), palestino, muerto en la faja de Gaza ocupada el 18 de marzo de 1993; el Sr. Silva Cnicambi (PMA), nacional de Angola, muerto en Angola el 11 de abril de 1993; el Sr. Phim Shoka (APRONUC), nacional de Camboya, muerto en Camboya el 12 de mayo de 1993; el Sr. Boris Zerazic (ACNUR), nacional de Bosnia, muerto en Bosnia el 15 de agosto de 1993.

29. En el informe del Secretario General se declaró asimismo que entre los más de 400 palestinos deportados al Líbano en diciembre de 1992 figuraban 16 funcionarios del OOPS, 11 de la faja de Gaza y 5 de la Ribera Occidental. Se trata del mayor número de funcionarios del OOPS deportados del territorio ocupado en un solo año desde que se inició la ocupación israelí en 1967. Ningún funcionario del OOPS figuraba entre el reducido número de deportados que regresaron con permiso de Israel en los meses siguientes. Las protestas del OOPS ante las autoridades israelíes por estas deportaciones fueron infructuosas. (Puede obtenerse información detallada a este respecto en el informe del Comisionado General del OOPS a la Asamblea General en su cuadragésimo octavo período de sesiones (A/48/13).)

1. Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente

30. En comparación con el año anterior, durante el período sobre el que se informa hubo un aumento considerable de funcionarios arrestados y detenidos sin juicio en los territorios ocupados. El número de funcionarios arrestados y detenidos en el Líbano disminuyó, mientras que el de los funcionarios en la República Árabe Siria aumentó de cero a tres. El total de funcionarios así detenidos durante el período de que se informa fue de 70. De entre ellos, 40 fueron arrestados y liberados sin cargo o juicio y dos fueron acusados, juzgados y sentenciados. Los otros 28 seguían detenidos al 30 de junio de 1993, como sigue:

Territorio ocupado de la faja de Gaza	23
Territorio ocupado de la Ribera Occidental	3
República Árabe Siria	<u>2</u>
	<u>28</u>

31. En ningún caso el OOPS recibió información adecuada y oportuna acerca de los motivos del arresto y la detención de funcionarios, a pesar de las solicitudes presentadas a las autoridades. El OOPS ha tenido acceso a 11 funcionarios de la Ribera Occidental y a 19 de la faja de Gaza detenidos en prisiones y centros de detención en los territorios ocupados y en Israel. El trato que recibían los funcionarios detenidos en los territorios ocupados y en Israel constituyó una causa principal de preocupación para el Organismo, pues los funcionarios ya liberados se quejaban de malos tratos, incluidos castigos corporales y abuso psicológico. A pesar de los esfuerzos desplegados por el Organismo, éste no pudo efectuar visitas a los funcionarios detenidos en otras partes.

32. Dos funcionarios del OOPS fueron muertos por miembros de las fuerzas de seguridad israelíes durante el período que se examina. El 23 de febrero de 1993, un enfermero, de 28 años de edad, recibió un disparo en la parte posterior de la cabeza mientras prestaba asistencia a un herido en Rafah. El 18 de marzo de 1993, un maestro del OOPS, de 47 años de edad, recibió un disparo y falleció mientras permanecía frente a una funeraria en Rafah. Estos fueron los primeros casos de funcionarios del Organismo muertos por las fuerzas de seguridad desde el estallido de la intifada en diciembre de 1987.

2. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

33. Durante el período que se examina, el ACNUR siguió funcionando en algunas zonas del mundo en que la falta de comprensión de su mandato y de respeto hacia él, así como de las prerrogativas e inmunidades de sus funcionarios, hicieron que el desempeño de las tareas humanitarias que se le habían asignado fuera sumamente difícil y a veces muy peligroso.

34. El incidente más grave en que estuvo involucrado el personal del ACNUR se produjo el 1º de febrero de 1993, cuando el Sr. R. Wanrooy viajaba por carretera de Peshawar a Jalalabad. Además del chófer contratado localmente, del Sr. Abdel Hadi y del Sr. Wanrooy, viajaba en el vehículo del ACNUR el Sr. A. Bullard, de Hábitat. Poco después de cruzar al Afganistán, al parecer los vehículos fueron detenidos por un grupo que les había tendido una emboscada y que inmediatamente abrió fuego, matando al Sr. Bullard e hiriendo gravemente al Sr. Abdel Hadi, quien falleció en un hospital de Jalalabad algunas horas más tarde. La emboscada y los asesinatos fueron señalados a la atención de las autoridades locales. No se sabe de que éstas hayan tomado medidas para descubrir y castigar a los culpables y garantizar que no se repitan incidentes de esa índole.

35. Las prerrogativas e inmunidades del personal del ACNUR en Yugoslavia han sido -y continúan siendo- gravemente comprometidas por prolongadas formalidades administrativas relacionadas con la tramitación de visas destinadas a los funcionarios. En Bosnia y Herzegovina, apenas ha pasado un día sin que se hayan recibido informes de incidentes en que el personal del ACNUR hubiera sido objeto de ataques efectuados por elementos uniformados y "civiles" en sus zonas de operaciones.

36. Al parecer, es evidente que, dada la naturaleza de sus operaciones y la corriente cada vez mayor de poblaciones de refugiados, se seguirá pidiendo al ACNUR que actúe en zonas -y bajo condiciones- en que la seguridad de su personal y el respeto de sus prerrogativas e inmunidades sean motivo de profunda preocupación. En tales circunstancias, es imperativo que todo incidente relacionado con la seguridad del personal o el respeto de sus prerrogativas o inmunidades se investigue a fondo y sea objeto de firmes protestas ante las autoridades de la zona y los representantes nacionales en la Sede y en Ginebra.

3. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

37. No ha habido arresto o detención de funcionarios de las Naciones Unidas por parte de las autoridades gubernamentales de Kenya. Sin embargo, hubo un gran número de casos de robo, muchos de ellos a punta de pistola, de vehículos que pertenecían ya a las oficinas de las Naciones Unidas en Nairobi o a funcionarios civiles internacionales. Por ejemplo, entre enero y junio de 1993 se produjeron 22 de esos robos de vehículos, de los cuales sólo tres pudieron ser recuperados, siquiera con algunas piezas desaparecidas. Durante la ejecución de esos delitos, los ladrones amenazaban con disparar sus armas, robaban dinero de las víctimas, les infligían lesiones menores y, en algunos casos, les despojaban de su ropa. Además, hubo un caso de invasión del local del ACNUR por parte de una pandilla armada, que hostigó al personal y robó un vehículo oficial. En cada uno de esos casos, la Secretaría presentó comunicaciones oficiales al Gobierno de Kenya. Desde principios de 1993, el Director Ejecutivo ha escrito dos veces al Ministro de Relaciones Exteriores y además sostuvo con él una entrevista acerca de la situación de la seguridad en Kenya. En respuesta, el Gobierno ha prometido hacer todo lo que esté a su

alcance para proteger a los funcionarios de las Naciones Unidas y los bienes de la Organización en Kenya.

4. Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial

38. Un consultor de la ONUDI, el Sr. Georg Hans Huetter, nacional austríaco, fue arrestado el 25 de junio de 1992 en Viena por su presunta participación en la conducta fraudulenta de un ex empleador. La condición jurídica del Sr. Huetter era la de experto en misión, con sujeción a la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas que, de acuerdo con el artículo 21 de la Constitución de la ONUDI, es aplicable a la ONUDI. En el momento de ser arrestado, el Sr. Huetter comunicó a las autoridades austríacas su condición jurídica. Esas autoridades nunca informaron oficialmente a la ONUDI del arresto y la detención del Sr. Huetter y sólo tres meses más tarde la ONUDI se enteró de ello mediante el abogado contratado por el Sr. Huetter. El 28 de septiembre de 1992, la secretaría de la ONUDI confirmó oficialmente la condición del Sr. Huetter al Ministerio de Relaciones Exteriores de Austria y objetó su arresto y detención considerando que constituían una violación de esa condición. Esas objeciones fueron repetidas en ulteriores comunicaciones. El Sr. Huetter permanece en custodia. Sin embargo, el 22 de febrero de 1993 el Ministerio de Relaciones Exteriores de Austria respondió a las objeciones de la secretaría señalando que el Ministerio y otras autoridades competentes habrían tenido en cuenta la condición del Sr. Huetter en calidad de experto en Misión asociado a la ONUDI si hubieran sabido de ello.

5. Programa Mundial de Alimentos

39. En enero de 1993, el Sr. M. T. Khalil, funcionario nacional del PMA en Kabul, fue detenido por las fuerzas de seguridad acusado de utilizar impropriamente el sistema de comunicaciones de las Naciones Unidas y de revelar coordenadas cartográficas a las tropas opositoras. Tras una firme intervención del Coordinador de Seguridad de las Naciones Unidas (Sr. Lockwood), el Sr. Khalil fue liberado el 30 de enero de 1993.

40. El personal del PMA en Angola quedó atrapado entre el fuego cruzado de facciones combatientes, con los resultados siguientes: a) las instalaciones de la Oficina del PMA en Huambo recibieron el impacto directo de un cohete a principios de febrero de 1993 y se incendiaron totalmente. Entre los escombros se encontraron los restos de tres personas; b) en septiembre de 1992, los miembros de un equipo de filmación del PMA fueron tomados como rehenes por tropas gubernamentales en la aldea de Cartara, a 29 kilómetros de Guilala, en la provincia Kwanza Norte. Tras prolongadas negociaciones, el grupo fue rescatado por un helicóptero del PMA; c) los siguientes funcionarios del PMA fueron muertos o desaparecieron durante el período en examen: el Sr. Pedro Shivinda, administrador interino de Base en Huambo y el Sr. Nestrendo, mecánico de vuelo. El Sr. Narcisso Paulo Sinao se encuentra desaparecido. Un guardia de la oficina, empleado ocasionalmente, fue muerto en Luena; d) el 26 de abril de 1993, un avión fletado por el PMA fue abatido en las cercanías de Luena, oportunidad en que falleció un miembro de la

tripulación, el Sr. Nestrendo y resultaron heridos otros dos, el Sr. Pedro Pascual y el capitán Andre Orlov.

41. El 28 de marzo de 1992, un inspector de ayuda alimentaria del PMA, el Sr. François Darcq, quedó atrapado en el terreno de combate en el Sudán meridional entre facciones del Ejército de Liberación Popular Sudanés (SPLA). Se le despojó de la ropa y pertenencias y se le amenazó de muerte. Consiguió escapar hacia los matorrales de donde fue conducido de nuevo a Nairobi en estado de conmoción grave. Dos empleados del PMA, el Sr. Guenther Kriessl (inspector de ayuda alimentaria) y el Sr. Fred Sembogo (chófer y mecánico) fueron mantenidos en cautividad del 4 al 30 de diciembre de 1992 por una facción del SPLA en el Sudán meridional. Tras la intervención de las Naciones Unidas, fueron liberados sin haber sufrido daños, pero sin explicaciones de ninguna clase.

42. El 15 de marzo de 1993, el Coordinador de Operaciones de Emergencia del PMA para la asistencia a los refugiados liberianos en Côte d'Ivoire, Sr. Sidile Kelefa (voluntario de las Naciones Unidas) fue secuestrado por agresores armados que lo pusieron en libertad más tarde llevándose consigo el vehículo del PMA.

43. El personal del PMA que presta servicios en Somalia soporta una situación de riesgo continuo, habida cuenta de las condiciones de seguridad que prevalecen en el país.

44. El 30 de junio de 1993, un convoy de alimentos del PMA tropezó con una mina en Sofala, resultando heridas dos personas.

II. CASOS RECIENTES

45. El Relator Especial de la Comisión sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias dirigió una carta, el 17 de febrero de 1993, al Presidente de la República del Zaire en la que se refería a diversos ataques realizados a fines de enero de 1993 contra la residencia del Sr. Mikuin Leleil Balanda, Presidente de la Corte Suprema de Justicia del Zaire y Presidente del Grupo Especial de Expertos sobre el Africa Meridional. Estos ataques estaban, al parecer, relacionados con la sentencia dictada por la Corte Suprema, bajo su presidencia, en el caso de "la matanza de estudiantes Lubumbashi", así como con un fallo en el caso de los "Testigos de Jehová", en que la Corte Suprema tomó posición sobre el actual régimen constitucional del Zaire. El Relator Especial expresó su preocupación por la integridad física y la vida del Sr. Balanda y su familia. A principios de diciembre de 1993, el Sr. Balanda informó personalmente a la Secretaría de que se habían realizado dos ataques más, el 17 y el 24 de julio de 1993.

Casos aclarados recientemente

46. El Tribunal Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo, en su fallo N° 1232, de fecha 10 de diciembre de 1993, dictó sentencia en el "caso Stulz". El Sr. Stulz, nacional de la antigua República Democrática Alemana, entró al servicio de la UNESCO el 15 de enero de 1975. El 8 de marzo de 1980, mientras se hallaba de visita en Berlín oriental, fue detenido, declarado culpable y condenado a tres años de prisión por un tribunal militar el 20 de agosto de 1980 después de un juicio secreto. Las autoridades de Alemania oriental obligaron a firmar una declaración de enfermedad al Sr. Stulz quien posteriormente comunicó al Director General de la UNESCO su intención de dimitir, dimisión que el Director General se negó a aceptar. El Sr. Stulz fue puesto en libertad el 17 de noviembre de 1981, pero no pudo salir del país hasta julio de 1989. El 20 de junio de 1984 solicitó su jubilación anticipada de la UNESCO. Su solicitud fue aceptada por el Director General el 5 de julio de 1985 con efecto retroactivo al 31 de octubre de 1984. Tras abandonar la antigua República Democrática Alemana, el Sr. Stulz volvió a ponerse en contacto con la UNESCO, que le ofreció un contrato de seis meses como consultor. El 29 de abril de 1990, el Sr. Stulz escribió al Director General de la UNESCO refiriéndose en particular a los problemas relacionados con su solicitud de jubilación anticipada. El 6 de enero de 1992, tras un procedimiento administrativo interno, el Director General se negó a anular la solicitud de jubilación anticipada del Sr. Stulz.

47. Con respecto al fondo de la cuestión, el Tribunal Administrativo consideró que la solicitud de jubilación anticipada de la UNESCO formulada el 20 de junio de 1984 había sido obtenida mediante coacción por las autoridades de Alemania oriental; en consecuencia, la UNESCO debería haber denegado esta solicitud. Así pues, el Tribunal revocó la decisión del Director General de la UNESCO de 6 de enero de 1992 y reintegró en su puesto al Sr. Stulz, con efecto desde el 1° de noviembre de 1984 hasta el 22 de julio de 1988, fecha de su jubilación.

48. Otro fallo del Tribunal Administrativo (Nº 1249) se refería a la adscripción de un nacional de la antigua URSS. El Sr. Reznikov había trabajado para la UNESCO como traductor/revisor desde 1974 hasta 1980 y en 1980 fue reclamado por las autoridades de la antigua URSS. Trabajó en Moscú hasta principios de 1984, tras lo cual comenzó a trabajar para la OMS con un contrato supernumerario. En noviembre de 1984 le ofrecieron un contrato por dos años que fue renovado dos veces por períodos de dos años. El 5 de junio de 1990, la División de Personal de la OMS dirigió al Jefe del Servicio de Idiomas una solicitud para que renovase el contrato del Sr. Reznikov o le pusiera fin. Esta solicitud iba acompañada de un formulario que debían completar el Sr. Reznikov y su supervisor directo, el Jefe de la Sección Rusa de Traducción. La renovación del contrato estaba condicionada a la aprobación de las autoridades de la URSS que, el 10 de agosto de 1990 informaron al Jefe de Personal de la OMS de que el Sr. Reznikov debía ser sustituido por otro traductor cuando expirase su contrato el 30 de noviembre de 1990. El 21 de agosto de 1990, el Jefe de la Sección Rusa de Traducción aceptó la decisión de las autoridades de no proponer la renovación. Sin embargo, el 30 de noviembre de 1990, el Sr. Reznikov fue informado de que las autoridades soviéticas habían convenido en prorrogar su adscripción por un período de seis meses. El 27 de febrero de 1991, el Jefe de Personal de la OMS informó al interesado de que su contrato expiraría el 31 de mayo de 1991 y de que, si quería ser reintegrado en su puesto, debería pedir a las autoridades de la URSS que revocasen su situación de "adscripción". El Sr. Reznikov recurrió contra esta decisión, pero el 2 de diciembre de 1991 el Director General de la OMS le comunicó que la no renovación de su contrato no constituía una violación de la Constitución de la OMS.

49. Con referencia al fondo del asunto, el Tribunal Administrativo declaró que el Director General había tomado una decisión vinculada a la actitud de las autoridades de la URSS y que, por lo tanto, violaba la norma que garantiza la independencia de las organizaciones internacionales y sus empleados. En consecuencia, el Tribunal revocó la decisión del Director General de fecha 2 de diciembre de 1991 y reintegró en su puesto al interesado con efecto a partir del 1º de junio de 1991.

III. MEDIDAS Y PROPUESTAS PARA PROMOVER EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
DE LOS FUNCIONARIOS INTERNACIONALES, INCLUIDOS LOS QUE PRESTAN
SERVICIO EN MISIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ

50. La seguridad del personal de las Naciones Unidas que presta servicio en misiones de mantenimiento de la paz fue considerada como cuestión primordial en la Sexta Comisión durante el cuadragésimo octavo período de sesiones de la Asamblea General. Sin embargo, ya se habían hecho a este respecto algunas observaciones pertinentes en el informe del Comité Especial de operaciones de mantenimiento de la paz (A/48/173). En el párrafo 50 de este informe, se hace referencia a diversas medidas para aumentar la seguridad del personal de mantenimiento de la paz, desde el mejoramiento de los mecanismos existentes hasta la elaboración de un nuevo instrumento jurídico internacional.

51. Aunque Ucrania presentó un "proyecto de convención internacional sobre el estatuto y la seguridad de las fuerzas de las Naciones Unidas y del personal civil asociado" (véase anexo III), algunas delegaciones expresaron dudas en cuanto a la utilidad de una nueva convención internacional. Se señaló que esta convención podría no ser suficiente, ya que sólo obligaría a los Estados que la hubieran ratificado. Se observó que una convención de esta índole no debía abarcar al personal contratado en el plano local por las Naciones Unidas.

52. La delegación de Ucrania explicó, sin embargo, que un instrumento internacional legalmente vinculante podría reunir todas las normas existentes de derecho internacional, en particular de derecho internacional humanitario, aplicables al personal de las fuerzas de las Naciones Unidas y el personal civil correspondiente, así como las disposiciones contenidas en los diversos acuerdos sobre el estatuto de las fuerzas armadas y demás acuerdos bilaterales y multilaterales concertados a este respecto.

53. La delegación de Nueva Zelandia propuso un proyecto de convención sobre la responsabilidad de los ataques contra el personal de las Naciones Unidas (A/C.6/48/L.2, anexo II). La diferencia entre ambas propuestas radica, entre otras cosas, en su ámbito de aplicación. En tanto que el artículo 1 de la propuesta de Ucrania vincula la aplicación de la convención a una operación de mantenimiento de la paz ordenada por el Consejo de Seguridad, la propuesta de Nueva Zelandia tiene un alcance mucho más amplio. Su artículo 2 declara que la convención se aplicará a: a) las personas enviadas por el Secretario General para participar en una operación de las Naciones Unidas, incluyendo el personal militar, el personal policial y el personal civil conexo; b) las personas enviadas por el Secretario General, por un organismo especializado o por otra organización o programa de las Naciones Unidas para realizar actividades relacionadas con una operación de las Naciones Unidas; c) las personas enviadas por cualquier otra organización u organismo de carácter humanitario para realizar actividades relacionadas con una operación de las Naciones Unidas cuando tal organización u organismo actúe en cumplimiento de un acuerdo con el Secretario General.

54. Entre otras propuestas formuladas por las delegaciones figuraban la adopción de medidas más enérgicas por el Consejo de Seguridad, el suministro al personal de equipo de protección adecuado, la reconfirmación de los

principios y obligaciones existentes de los gobiernos huéspedes, la mejora de la capacidad de obtención de información de la Organización y el establecimiento de un sistema unificado de indemnizaciones por muerte y lesiones del personal de mantenimiento de la paz.

55. La Sexta Comisión estableció un grupo de trabajo para examinar más detenidamente esas cuestiones. El 15 de noviembre de 1993, su Presidente declaró que no había desacuerdo en que el nuevo instrumento debería abarcar al personal militar de las Naciones Unidas y el personal civil, incluido el personal de los organismos especializados y otros organismo que tuviese una relación jurídica definida con las Naciones Unidas y que hubiese sido empleado en una operación autorizada por el Consejo de Seguridad.

56. En cuanto al tipo de instrumentos requerido, eran tres las opciones principales: una declaración no obligatoria, un protocolo adicional a la Convención de 1973 sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos, y un nuevo instrumento obligatorio autónomo. Algunas delegaciones sugirieron la idea de elaborar una declaración como primer paso hacia la elaboración de un tratado. La razón era que una declaración podría elaborarse más rápidamente que un tratado, constituiría un gesto significativo por parte de la comunidad internacional y ayudaría a los Estados a identificar las cuestiones de fondo a fin de preparar un instrumento obligatorio.

57. Sin embargo se expresaron graves reservas en cuanto a la utilidad de este enfoque, habida cuenta de que los responsables de los ataques contra el personal de las Naciones Unidas habían hecho caso omiso de anteriores instrumentos no obligatorios, incluidas las resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad en virtud del Capítulo VII de la Carta. También se expresó la preocupación de que la elaboración de una declaración como paso intermedio retrasaría en realidad innecesariamente la preparación del instrumento obligatorio que se requería.

58. La idea de elaborar un protocolo adicional a la Convención de 1973, que había recibido algún apoyo durante el debate en la Sexta Comisión, se reconoció de nuevo como atractiva en principio y fue considerada seriamente. Finalmente no fue retenida por el grupo de trabajo por diversas razones. Una de ellas era que el nuevo instrumento debía enviar una clara señal política acerca de la importancia que la comunidad internacional atribuía al problema. Otra razón era que la Convención de 1973 no resultaba plenamente aceptable para algunos Estados y que la participación en un protocolo facultativo excluiría a los Estados que no eran partes en la Convención de 1973. Una tercera razón era que el texto de la Convención de 1973 dejaba en claro que su objetivo era ocuparse de un problema conceptual y políticamente diferente, a saber la vulnerabilidad del personal diplomático ante los actos de terrorismo. Había también dificultades técnicas de carácter jurídico debido a la complejidad que suponía un estudio del equilibrio y estructura de la Convención para tratar de ampliar su alcance.

59. El 9 de diciembre de 1993, la Asamblea General decidió establecer un comité especial encargado de elaborar una convención internacional sobre la "seguridad del personal de las Naciones Unidas y personal asociado, con

particular referencia a la responsabilidad por los ataques de que sean objeto".

Anexo I

LISTA CONSOLIDADA*/ DE FUNCIONARIOS ARRESTADOS Y DETENIDOS
O DESAPARECIDOS RESPECTO DE LOS CUALES LAS NACIONES UNIDAS
Y LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y ORGANIZACIONES AFINES NO
HAN PODIDO EJERCER PLENAMENTE SU DERECHO DE PROTECCION

<u>Nombre</u>	<u>Organismo</u>	<u>Lugar y fecha del incidente</u>
Sr. Abdala Daker Hayatli	OOPS	Desaparecido en la República Árabe Siria desde el 20 de abril de 1980
Sr. Izzedine Hussein Abu Khreish	"	Detenido en la República Árabe Siria desde el 11 de septiembre de 1980
Sr. Mahmoud Hussein Ahmad	"	Desaparecido en el Líbano desde el 22 de marzo de 1983; presuntamente detenido por milicias o elementos desconocidos
Sr. Mohammad Ali Sabbah	"	Desaparecido en el Líbano desde el 22 de marzo de 1983, presuntamente detenido por milicias o elementos desconocidos
Sr. Daulat Mir	FAO	Detenido el 28 de agosto de 1984 y posteriormente reclutado para prestar el servicio militar en el Afganistán
Sr. Alec Collett	OOPS	Detenido en el Líbano por milicias o elementos desconocidos desde el 25 de marzo de 1985

En la lista consolidada figuran, en orden cronológico, los nombres de los funcionarios que seguían detenidos o desaparecidos el 30 de junio de 1993. Sin embargo, no se incluye información sobre todos los casos de funcionarios arrestados, detenidos o desaparecidos hasta la fecha ni sobre los casos de los que perdieron la vida en el desempeño de sus funciones.

<u>Nombre</u>	<u>Organismo</u>	<u>Lugar y fecha del incidente</u>
Sr. Mohammad Mustafa El-Hajj Ali	"	Desaparecido en el Líbano desde el 28 de noviembre de 1986; presuntamente detenido por milicias o elementos desconocidos
Sr. Saleem Hairan	FAO	Detenido y reclutado el 27 de enero de 1988 para prestar el servicio militar en el Afganistán
Sra. Zainab Aw Jama Adan	PMA	Desaparecida en Somalia desde el 4 de junio de 1988
Sr. Mohammed Omar	FAO	Detenido y reclutado el 17 de mayo de 1989 para prestar el servicio militar en el Afganistán
Sr. Abdul Fattah	PMA	Secuestrado en el Pakistán por elementos desconocidos el 3 de septiembre de 1989
Sr. Ahmad Mohamed Ali	"	Detenido en Somalia por el Servicio Nacional de Seguridad de Somalia desde el 25 de mayo de 1990
Sr. Adel Ali Abu Ghali	OOPS	Detenido en el territorio ocupado de la faja de Gaza desde el 25 de agosto de 1990
Sr. Abdalla Ismail Abu Shawareb	"	Detenido en el territorio ocupado de la faja de Gaza desde el 6 de noviembre de 1990
Sr. Ghassan Musaed El Arabid	"	Detenido en el territorio ocupado de la faja de Gaza desde el 11 de agosto de 1991
Sr. Kassu Asgedon	PMA	Detenido en Etiopía desde el 4 de septiembre de 1991
Sr. Mohammad Rajab El-Sa'afin	OOPS	Detenido en el territorio ocupado de la faja de Gaza desde el 20 de julio de 1992
Sr. A/Fattah Ismail Fayyad	"	Detenido en el territorio ocupado de la faja de Gaza desde el 22 de septiembre de 1992

<u>Nombre</u>	<u>Organismo</u>	<u>Lugar y fecha del incidente</u>
Sr. Mohammed Mohammed Najib Madi	"	Detenido en el territorio ocupado de la faja de Gaza desde el 15 de octubre de 1992
Sr. Suliman Hmaid Mohd El Sofi	OOPS	Detenido en el territorio ocupado de la faja de Gaza desde el 22 de noviembre de 1992
Sr. Amin Ali El Khatib	"	Detenido en el territorio ocupado de la faja de Gaza desde el 23 de noviembre de 1992
Sr. Zaher Ismail Ahmad	"	Detenido en el territorio ocupado de la faja de Gaza desde el 26 de enero de 1993
Sr. Bassan Mohammad Musa	"	Detenido en el territorio ocupado de la faja de Gaza desde el 26 de enero de 1993
Sr. Hasam Hassan Abu Jray	"	Detenido en el territorio ocupado de la faja de Gaza desde el 14 de febrero de 1993
Sr. Hasan Mohammad Hammad	"	Detenido en el territorio ocupado de la Ribera Occidental desde el 15 de febrero de 1993
Sr. Yasin Musallam Abu Hatab	"	Detenido en el territorio ocupado de la faja de Gaza desde el 17 de febrero de 1993
Sr. As'ad Yousef As'ad Acad	"	Detenido en el territorio ocupado de la faja de Gaza desde el 18 de febrero de 1993
Sr. Maher Salim El Toukhi	"	Detenido en el territorio ocupado de la faja de Gaza desde el 18 de febrero de 1993
Sr. Ibrahim Mohammed Madi	"	Detenido en el territorio ocupado de la faja de Gaza desde el 18 de febrero de 1993

<u>Nombre</u>	<u>Organismo</u>	<u>Lugar y fecha del incidente</u>
Sr. Suliman A/Hadi Abu Rous	"	Detenido en el territorio ocupado de la faja de Gaza desde el 14 de marzo de 1993
Sr. Sami Abdalla Abu Hmaiseh	OOPS	Detenido en el territorio ocupado de la faja de Gaza desde el 11 de abril de 1993
Sr. Mohammad Sameh Massad	"	Detenido en el territorio ocupado de la Ribera Occidental desde el 29 de abril de 1993
Sr. Yousef Dawoud Shahin	"	Detenido en el territorio ocupado de la faja de Gaza desde el 2 de mayo de 1993
Sr. Ahmad Hasan Abu Houli	"	Detenido en el territorio ocupado de la faja de Gaza desde el 3 de mayo de 1993
Sr. Jaber Ali Wahdan	"	Detenido en el territorio ocupado de la Ribera occidental desde el 3 de mayo de 1993
Sr. Abdel Hakim A/Kabbu Abu Houli	"	Detenido en el territorio ocupado de la faja de Gaza desde el 6 de mayo de 1993
Sr. Asia Salim Yousef	"	Detenido en la República Árabe Siria desde el 8 de mayo de 1993
Sr. Fawzi Mohammed Abu Armaneh	"	Detenido en el territorio ocupado de la faja de Gaza desde el 11 de mayo de 1993
Sr. Abdul Naser Fourani	"	Detenido en la República Árabe Siria desde el 19 de mayo de 1993
Sr. Suliman Ibrahim Jouda	"	Detenido en el territorio ocupado de la faja de Gaza desde el 20 de mayo de 1993
Sr. Mohammed A/Rahman Ali	"	Detenido en el territorio ocupado de la faja de Gaza desde el 1º de junio de 1993
Sr. Madhmoud Arafat El Khawaja	"	Detenido en el territorio ocupado de la faja de Gaza desde el 14 de junio de 1993

<u>Nombre</u>	<u>Organismo</u>	<u>Lugar y fecha del incidente</u>
Sr. Mahmoud Ghanem	"	Detenido en el territorio ocupado de la faja de Gaza desde el 25 de junio de 1993
Sr. Andualem Zeleke	CEPA	Detenido en Etiopía desde el 25 de junio de 1993
Sr. Jamal Atiya Tayeh	OOPS	Detenido en el territorio ocupado de la faja de Gaza desde el 28 de junio de 1993

Anexo II

NUEVA ZELANDIA: PROPUESTA RELATIVA A UN PROYECTO DE CONVENCIÓN SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE LOS ATAQUES CONTRA EL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS

Artículo 1

Definiciones

1. Por "presunto culpable" se entiende la persona respecto de quien existan suficientes elementos de prueba para determinar prima facie que ha cometido uno o varios de los delitos definidos en el artículo 5.
2. Por "Secretario General" se entiende el Secretario General de las Naciones Unidas.
3. Por "Consejo de Seguridad" se entiende el órgano establecido en virtud del Artículo 7 de la Carta de las Naciones Unidas.
4. Por "organismo especializado" se entiende todo organismo establecido por acuerdo intergubernamental conforme al Artículo 57 de la Carta de las Naciones Unidas.
5. Por "operación de las Naciones Unidas" se entiende toda operación iniciada en cumplimiento de un mandato aprobado por resolución del Consejo de Seguridad.
6. Por "personal de las Naciones Unidas" se entienden las personas a quienes se aplica la presente Convención de conformidad con el artículo 2.

Artículo 2

Aplicación de la Convención

La presente Convención se aplicará a:

- a) Las personas enviadas por el Secretario General para participar en una operación de las Naciones Unidas, incluyendo:
 - i) El personal militar;
 - ii) El personal policial;
 - iii) El personal civil conexo;
- b) Las personas enviadas por el Secretario General, por un organismo especializado o por otra organización o programa del sistema de las

Naciones Unidas para realizar actividades relacionadas con una operación de las Naciones Unidas;

c) Las personas enviadas por cualquier otra organización u organismo de carácter humanitario para realizar actividades relacionadas con una operación de las Naciones Unidas cuando tal organización u organismo actúe en cumplimiento de un acuerdo con el Secretario General.

Artículo 3

Obligación de garantizar la seguridad del personal de las Naciones Unidas

1. Los Estados partes tienen la obligación de adoptar todas las medidas apropiadas para garantizar la seguridad del personal de las Naciones Unidas. En particular, los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para proteger al personal de las Naciones Unidas desplegado en su territorio contra ataques u otros actos de violencia.

2. Todo Estado parte, cuando no pueda ejercer su jurisdicción sobre las personas responsables de ataques contra el personal de las Naciones Unidas desplegado en su territorio, cooperará con los demás Estados partes y con el Secretario General para lograr que se aplique al presunto culpable lo dispuesto en la presente Convención.

Artículo 4

Obligación de los Estados de cooperar en la prevención de los delitos contra el personal de las Naciones Unidas

Los Estados partes cooperarán en la prevención de los delitos definidos en el artículo 5, en particular:

a) Adoptando todas las medidas factibles para impedir que se prepare en sus respectivos territorios la comisión de esos delitos dentro o fuera de su territorio;

b) Intercambiando información y coordinando la adopción de las medidas administrativas y de otra índole que sean procedentes para impedir que se cometan esos delitos.

Artículo 5

Delitos contra el personal de las Naciones Unidas

1. Todo Estado parte calificará como delitos en su legislación nacional los actos siguientes, cuando se realicen intencionalmente:

a) La comisión de un homicidio, secuestro u otro atentado contra la integridad física o la libertad de cualquier funcionario de las Naciones Unidas;

b) La comisión, recurriendo a la violencia, de un atentado contra los locales oficiales, la residencia privada o los medios de transporte de cualquier funcionario de las Naciones Unidas, si tal atentado puede poner en peligro la integridad física o la libertad de ese funcionario;

c) La amenaza de cometer tal atentado;

d) La tentativa de cometer tal atentado;

e) La complicidad en tal atentado, incluyendo su organización o dirección o la incitación a otros para que lo cometan.

2. Todo Estado parte castigará esos delitos con penas adecuadas que tengan en cuenta su gravedad.

3. Lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 de este artículo no afectará a las obligaciones que tienen los Estados partes, en virtud del derecho internacional, de adoptar todas las medidas apropiadas para prevenir otros atentados contra la integridad física, la libertad o la dignidad de los funcionarios de las Naciones Unidas.

Artículo 6

Establecimiento de la jurisdicción

1. Todo Estado parte adoptará las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre los delitos definidos en el artículo 5 en los casos siguientes:

a) Cuando el delito se haya cometido en el territorio de ese Estado o a bordo de un buque o aeronave matriculado en ese Estado;

b) Cuando el presunto culpable sea nacional de ese Estado;

c) Cuando el delito se haya cometido contra un nacional de ese Estado, si éste lo considera procedente.

2. Todo Estado parte adoptará las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre los delitos definidos en el artículo 5 en el caso de que el presunto culpable se encuentre en su territorio y de que ese Estado no conceda su extradición, conforme al artículo 10, a ninguno de los Estados a los que se refiere el párrafo 1 de este artículo.

3. La presente Convención no excluirá ninguna jurisdicción penal ejercida de conformidad con la legislación nacional.

Artículo 7

Comunicación de información sobre los presuntos culpables

1. El Estado parte en el que se haya cometido cualquiera de los delitos definidos en el artículo 5, si tiene razones para creer que el presunto culpable ha huido de su territorio, deberá comunicar a todos los demás Estados interesados, directamente o por conducto del Secretario General, todos los datos pertinentes relativos al delito cometido y toda la información de que disponga sobre la identidad del presunto culpable.

2. Cuando se haya cometido contra cualquier funcionario de las Naciones Unidas cualquiera de los delitos definidos en el artículo 5, todo Estado parte que disponga de información sobre la víctima y las circunstancias del delito se esforzará por comunicarla completa y rápidamente, en las condiciones establecidas por su legislación nacional, al Secretario General y al Estado o los Estados interesados.

Artículo 8

Medidas destinadas a asegurar el enjuiciamiento o la extradición

1. Si considera que las circunstancias lo justifican, el Estado parte en cuyo territorio se encuentre el presunto culpable adoptará las medidas apropiadas, conforme a su legislación nacional, para asegurar la presencia de esa persona a los efectos de su enjuiciamiento o extradición.

2. Las medidas tomadas de conformidad con el párrafo 1 de este artículo serán notificadas sin demora al Secretario General y, directamente o por conducto del Secretario General:

- a) Al Estado en el que se haya cometido el delito;
- b) Al Estado o los Estados de que sea nacional el presunto culpable o, si éste es apátrida, al Estado en cuyo territorio resida permanentemente esa persona;
- c) Al Estado o los Estados de que sea nacional la víctima;
- d) A todos los demás Estados interesados;
- e) A cualquier organismo especializado u otra organización, programa u organismo pertinentes.

3. Todo presunto culpable tendrá derecho:

- a) A ponerse sin demora en comunicación con el representante competente más próximo del Estado del que sea nacional o al que competa por otras razones la protección de sus derechos o, si esa persona es apátrida, del Estado que esa persona solicite y que esté dispuesto a proteger sus derechos;

- b) A recibir la visita de un representante de ese Estado.

Artículo 9

Enjuiciamiento de los presuntos culpables

El Estado parte en cuyo territorio se encuentre el presunto culpable, si no concede su extradición, someterá el asunto, sin ninguna excepción y sin demora injustificada, a sus autoridades competentes para el ejercicio de la acción penal, según el procedimiento establecido en la legislación de ese Estado.

Artículo 10

Disposiciones para la extradición de los presuntos culpables

1. Los delitos definidos en el artículo 5, si no están enumerados entre los casos de extradición en un tratado de extradición vigente entre los Estados partes, se considerarán incluidos como tales en ese tratado. Los Estados partes se comprometen a incluir esos delitos, en todo tratado de extradición que concierten entre sí, como infracciones que dan lugar a extradición.

2. Todo Estado parte que subordine la extradición a la existencia de un tratado, si recibe una petición de extradición de otro Estado parte con el que no tiene tratado de extradición, podrá, en el ejercicio de sus facultades discrecionales, considerar la presente Convención como la base jurídica necesaria para la extradición en lo que respecta a esos delitos. La extradición estará sometida a las condiciones establecidas por la legislación del Estado requerido.

3. Los Estados partes que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado reconocerán esos delitos como infracciones que dan lugar a extradición entre ellos en las condiciones establecidas por la legislación del Estado requerido.

4. A los efectos de la extradición entre Estados partes, se considerará que los delitos se han cometido, no solamente en el lugar donde se perpetraron, sino también en el territorio de los Estados que están obligados a establecer su jurisdicción en virtud del párrafo 1 del artículo 6.

Artículo 11

Asistencia mutua en procedimientos penales

1. Los Estados partes se prestarán toda la asistencia posible a los efectos de los procedimientos penales relativos a los delitos definidos en el artículo 5, en particular proporcionando todos los elementos de prueba de que dispongan que sean necesarios para tales actuaciones.

2. Lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo no afectará a las obligaciones dimanantes de cualquier otro tratado, bilateral o multilateral, que regule, en todo o en parte, la asistencia mutua en cuestiones penales.

Artículo 12

Trato equitativo de los presuntos culpables

Se garantizará un trato equitativo, en todas las fases del procedimiento, a toda persona con respecto a la cual se estén realizando actuaciones en relación con cualquiera de los delitos definidos en el artículo 5.

Artículo 13

Notificación del resultado de las actuaciones

El Estado parte en el que se procese a un presunto culpable comunicará el resultado final de las actuaciones al Secretario General, quien transmitirá la información a los demás Estados partes.

Artículo 14

Obligación del personal de las Naciones Unidas de respetar
el derecho humanitario internacional

Lo dispuesto en la presente Convención no será interpretado de forma que menoscabe la obligación del personal de las Naciones Unidas de respetar el derecho humanitario internacional.

Artículo 15

Difusión

Los Estados partes se comprometen a dar a la presente Convención la difusión más amplia posible y, en particular, a incluir su estudio, así como el de las disposiciones pertinentes del derecho humanitario internacional, en sus programas de instrucción militar y a fomentar su estudio por la población civil, de forma que las disposiciones de la presente Convención sean conocidas por las fuerzas armadas y por la población civil.

Artículo 16

Arreglo de controversias

Artículo 17

Firma/Ratificación/Adhesión

Artículo 18

Entrada en vigor

Artículo 19

Denuncia

Artículo 20

Textos auténticos

Anexo III

UCRANIA: PROYECTO DE CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE EL ESTATUTO Y
LA SEGURIDAD DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS DE LAS NACIONES UNIDAS
Y DEL PERSONAL CIVIL ASOCIADO

Preámbulo

Los Estados partes,

Reiterando su vivo deseo de que la paz prevalezca entre los pueblos,

Recordando que todo Estado tiene el deber, de conformidad con las normas pertinentes del derecho internacional, de abstenerse en sus relaciones internacionales del uso o la amenaza de uso de la fuerza contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas,

Reconociendo la importancia vital de la participación del personal de las fuerzas de las Naciones Unidas y el personal civil asociado en las actividades de diplomacia preventiva y de establecimiento, mantenimiento y consolidación de la paz y en las operaciones humanitarias,

Conscientes de los acuerdos existentes para garantizar la seguridad del personal de las fuerzas de las Naciones Unidas y el personal civil asociado, así como de las medidas adoptadas por los principales órganos de las Naciones Unidas a ese respecto,

Convencidos de que el despliegue de fuerzas de las Naciones Unidas de mantenimiento de la paz es un componente integral de los esfuerzos realizados por las Naciones Unidas en pro de la paz, que acrecientan la eficacia de las Naciones Unidas en lo que respecta a mantener la paz y la seguridad internacionales,

Teniendo presente que las crecientes actividades de las Naciones Unidas en la esfera de la diplomacia preventiva, el establecimiento, mantenimiento y consolidación de la paz y las operaciones humanitarias requieren el suministro de amplios recursos humanos, financieros y materiales para la Organización,

Haciendo un llamamiento a todos los Estados en cuyo territorio se haya destacado a personal de las fuerzas de las Naciones Unidas y al personal civil asociado con arreglo al mandato aprobado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y a todas las partes interesadas, para que presten apoyo amplio con miras a facilitar la realización de una operación, e instándolos a que respeten y garanticen la seguridad de dicho personal,

Subrayando la necesidad de proteger adecuadamente al personal que participa en las actividades de diplomacia preventiva, y de establecimiento,

mantenimiento y consolidación de la paz y en operaciones humanitarias, de conformidad con las normas y los principios del derecho internacional,

Han convenido en lo siguiente:

Parte I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Principios generales y alcance

1. Los Estados partes se comprometen a respetar y a garantizar el respeto de la presente Convención en toda circunstancia.
2. En los casos no abarcados por la presente Convención ni por otros acuerdos internacionales, el personal de las fuerzas de las Naciones Unidas y el personal civil asociado permanecerán bajo la protección de los principios universalmente reconocidos del derecho internacional, en particular, de las normas de derecho internacional humanitario.
3. La presente Convención se aplicará a los casos de arreglo de conflictos armados entre dos o entre varios Estados partes que amenacen la paz y la seguridad internacionales y en los cuales participe personal de las fuerzas de las Naciones Unidas y personal civil asociado de conformidad con una decisión del Consejo de Seguridad.
4. La presente Convención se aplicará también a los conflictos de carácter no internacional que se produzcan dentro de un Estado parte cuando tales conflictos amenacen con convertirse en un conflicto internacional, o cuando las autoridades representativas de un Estado parte hayan pedido al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que despliegue en su territorio una fuerza de las Naciones Unidas de mantenimiento de la paz.
5. A menos que se disponga expresamente otra cosa, las disposiciones de la presente Convención se aplicarán exclusivamente a la zona en que se encuentre desplegada la fuerza de las Naciones Unidas de mantenimiento de la paz.
6. Si una de las partes en un conflicto no es Estado parte en la presente Convención, los Estados partes estarán igualmente obligados por sus disposiciones en sus relaciones.

Artículo 2

Definiciones

Para los efectos de la presente Convención:

a) Por "operación de las Naciones Unidas de mantenimiento de la paz" se entenderá el despliegue de personal de las Naciones Unidas en la zona en conflicto de conformidad con el mandato aprobado por una resolución del Consejo de Seguridad, con fines, entre otras cosas, de prevención, mantenimiento o restablecimiento de la paz y la seguridad internacionales en interés exclusivo de la comunidad internacional, de separación de las partes en conflicto, de creación de condiciones para el arreglo pacífico de un conflicto, de supervisión de la cesación del fuego y de cumplimiento de los acuerdos de paz, así como para prestar asistencia humanitaria a la población civil en la zona de despliegue, en el entendimiento de que la operación de las Naciones Unidas de mantenimiento de la paz se realizará a petición o con el consentimiento de las partes interesadas;

b) Por "personal de la fuerza de las Naciones Unidas" se entenderá un contingente del personal de las Naciones Unidas que participa en la operación de las Naciones Unidas de mantenimiento de la paz, incluido el personal militar y los observadores militares aportados por los Estados Miembros a petición del Secretario General y con la aprobación del Consejo de Seguridad para cumplir el mandato aprobado por el Consejo para una operación determinada, así como el personal de la policía civil y los funcionarios políticos civiles, los supervisores de los derechos humanos, los oficiales electorales, los especialistas en ayuda a refugiados y asistencia humanitaria, etc., proporcionados por los Estados Miembros;

c) Por "personal civil asociado" se entenderá todo el personal destacado en una zona de una operación de mantenimiento de la paz por un organismo especializado o alguna otra organización o programa del sistema de las Naciones Unidas para que lleve a cabo actividades relacionadas con el cumplimiento de un mandato aprobado por el Consejo de Seguridad, así como todas las personas destacadas en una zona por cualquier otra organización u organismo de carácter humanitario para que realice actividades en virtud de un arreglo concertado con las Naciones Unidas en relación con el cumplimiento de un mandato aprobado por una resolución del Consejo de Seguridad.

Artículo 3

Identificación

Las Naciones Unidas tomarán las medidas adecuadas para que el personal de las fuerzas de las Naciones Unidas y el personal civil asociado, así como los edificios y el equipo pertinentes, se puedan identificar cuando estén destinados exclusivamente al cumplimiento de un mandato aprobado por el Consejo de Seguridad, a saber:

a) Se izará la bandera de las Naciones Unidas en el cuartel general, los campamentos y demás lugares, y en las zonas de destacamento del personal de las fuerzas de las Naciones Unidas y el personal civil asociado en el país donde se lleve a cabo la operación de las Naciones Unidas de mantenimiento de la paz;

b) Los vehículos de transporte por tierra, agua y aire del personal de las fuerzas de las Naciones Unidas y del personal civil asociado estarán marcados con el distintivo de las Naciones Unidas y se habrá informado de su presencia al gobierno del Estado en cuyo territorio se realice una operación de las Naciones Unidas de mantenimiento de la paz;

c) El personal de las fuerzas de las Naciones Unidas y el personal civil asociado deberán llevar en todo momento el distintivo en su uniforme, el que será puesto en conocimiento del gobierno del Estado en cuyo territorio se realice una operación de las Naciones Unidas de mantenimiento de la paz. En los casos en que parte del territorio esté ocupado, tal información será dada a conocer a la administración que ejerza efectivamente autoridad sobre esa parte del territorio;

d) El personal militar y el personal de la policía civil deberán llevar el uniforme del ejército o de la policía nacionales cuando desempeñen funciones oficiales;

e) Cada Estado parte, así como las partes en un conflicto, deberán tratar de adoptar y poner en práctica métodos y procedimientos que hagan posible identificar al personal de las fuerzas de las Naciones Unidas y al personal civil asociado, así como a los medios de transporte que utilicen el distintivo;

f) En las zonas en que haya combates o en las que es probable que haya combates deberá identificarse al personal de las fuerzas de las Naciones Unidas y al personal civil asociado por el distintivo y por una tarjeta de identidad que certifique su categoría internacional.

Parte II

ESTATUTO DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS DE LAS NACIONES UNIDAS Y DEL PERSONAL CIVIL ASOCIADO

Artículo 4

Respeto del carácter internacional

El gobierno del Estado parte en cuyo territorio se realice la operación de las Naciones Unidas de mantenimiento de la paz o la administración que ejerza autoridad efectiva sobre el territorio del caso o la zona de las operaciones respetará el carácter internacional exclusivo del personal de las fuerzas de las Naciones Unidas y del personal civil asociado.

Artículo 5

Prerrogativas e inmunidades del personal de las fuerzas de las Naciones Unidas y del personal civil asociado

1. El personal de las fuerzas de las Naciones Unidas y el personal civil asociado tendrán derecho a entrar y salir libremente del Estado en cuyo territorio se lleve a cabo la operación de las Naciones Unidas de mantenimiento de la paz. Para entrar o salir, el personal de las fuerzas de las Naciones Unidas y el personal civil asociado necesitarán tan sólo un documento de identidad expedido por el representante especial/comandante de la fuerza. Se hará una excepción respecto de la primera entrada, en que se aceptará un documento de identidad expedido por las autoridades competentes de un Estado parte.

2. No se aplicarán las reglamentaciones existentes sobre pasaportes y visados ni tampoco las formalidades de inmigración. Tampoco se aplicarán las disposiciones que regulen la estancia en el país de nacionales extranjeros, incluidas las relativas al registro. Sin embargo, no se considerará que este personal tenga derecho a residencia permanente en el país.

3. Se concederán las siguientes prerrogativas e inmunidades al personal de las fuerzas de las Naciones Unidas y al personal civil asociado en el desempeño de sus funciones:

a) Inmunidad respecto de todo arresto o detención personal, así como inmunidad judicial con respecto a palabras dichas o escritas y a todos los actos por ellos realizados en carácter oficial;

b) Exención de impuestos sobre los sueldos y emolumentos percibidos de las Naciones Unidas o del gobierno de su país de origen y exención de todos los demás impuestos directos, excepto los impuestos municipales por servicios prestados;

c) Exención de derechos de aduana y pagos por concepto de correspondencia privada, giros postales, materiales impresos y paquetes enviados o recibidos por el personal de las fuerzas de las Naciones Unidas y el personal civil asociado;

d) Otras prerrogativas e inmunidades que se determinen en el acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas con arreglo a las disposiciones del artículo V de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas de 1946.

Artículo 6

Derecho a portar armas

1. El personal militar y el personal de policía civil tendrán derecho a poseer y portar armas y a utilizarlas en defensa propia cuando desempeñen las funciones que les hayan sido encomendadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

2. El tipo de armas y las normas para trabar combate serán determinados por una disposición concreta del mandato aprobado para cada operación de las

E/CN.4/1994/30

página 36

Naciones Unidas de mantenimiento de la paz mediante una resolución del Consejo de Seguridad.

Artículo 7

Respeto de las leyes y los reglamentos del país anfitrión

1. Sin perjuicio de sus prerrogativas e inmunidades y del desempeño de sus funciones, el personal de las fuerzas de las Naciones Unidas y el personal civil asociado respetarán las leyes y los reglamentos del Estado parte en cuyo territorio se realice la operación de las Naciones Unidas de mantenimiento de la paz.

2. En el caso de que cometa un delito un miembro del personal de las fuerzas de las Naciones Unidas o del personal civil asociado, será competente el Estado cuya ciudadanía permanente tenga el autor del delito.

Parte III

OBLIGACIONES Y REPRESION DE LAS VIOLACIONES DE LA CONVENCION

Artículo 8

Obligaciones del Estado parte en que se realiza la operación de mantenimiento de la paz

1. El Estado parte en cuyo territorio se realiza la operación de las Naciones Unidas de mantenimiento de la paz se compromete a prestar apoyo general al personal de las fuerzas de las Naciones Unidas y a personal civil asociado en el desempeño de sus funciones y a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el respeto y la seguridad de dicho personal.

2. El gobierno del Estado parte en cuyo territorio se realiza la operación de las Naciones Unidas de mantenimiento de la paz garantizará el enjuiciamiento penal de las personas que cometan actos hostiles contra el personal de las fuerzas de las Naciones Unidas y el personal civil asociado. El gobierno intervendrá con rapidez y eficacia para disuadir, procesar y castigar a todos los responsables de ataques y otros actos de violencia contra dicho personal.

3. Si el gobierno del Estado parte en cuyo territorio se realiza la operación de las Naciones Unidas de mantenimiento de la paz no puede ejercer su competencia a fin de garantizar la seguridad de dicho personal, deberá cooperar plenamente con otros Estados partes a fin de actuar colectivamente para lograr que las personas que hayan cometido, autorizado o consentido ataques y otros actos de violencia contra el personal de las fuerzas de las Naciones Unidas y el personal civil correspondiente sean consideradas responsables de un delito internacional.

Artículo 9

Cooperación

En una situación de violación grave de la presente Convención, los Estados partes se comprometen a actuar, conjunta o individualmente, en cooperación con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, incluido el Capítulo VII.

Artículo 10

Violaciones de la Convención

Los ataques o amenazas de ataques u otros actos de violencia contra el personal de las fuerzas de las Naciones Unidas y el personal civil asociado, como el secuestro, la obstrucción o la detención de personas, se considerarán delitos penales y entrañarán una responsabilidad internacional de conformidad con la presente Convención y con las normas pertinentes del derecho internacional.

Artículo 11

Responsabilidad

Las partes en un conflicto se considerarán responsables de las violaciones de la Convención cometidas por personas que formen parte de sus fuerzas armadas y por civiles bajo su control o jurisdicción.

Artículo 12

Derecho del personal militar de las fuerzas de las
Naciones Unidas a actuar en defensa propia

En caso de violaciones graves de las disposiciones de la presente Convención por fuerzas armadas o grupos armados de una de las partes en un conflicto, el personal militar de las fuerzas de las Naciones Unidas tendrá derecho a actuar en defensa propia de acuerdo con las normas para trabar combate adoptadas para cada operación de mantenimiento de la paz, las que podrán ampliarse o especificarse con arreglo a una decisión especial del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Artículo 13

Retiro del personal de las Naciones Unidas

Si siguen ocurriendo casos como los previstos en el artículo 10, los Estados partes cuyo personal participe en la operación de las Naciones Unidas de mantenimiento de la paz tendrán derecho a retirar a su personal por no estar debidamente protegido.

Artículo 14

Indemnización

En caso de que algún miembro del personal de las fuerzas de las Naciones Unidas o del personal civil asociado resulte muerto o reciba una herida u otra lesión o que el equipo y los medios técnicos de las fuerzas de las Naciones Unidas de mantenimiento de la paz resulten dañados, las Naciones Unidas pagarán una indemnización al beneficiario a petición del Estado cuyo nacional haya resultado muerto o herido o cuyos bienes y equipo hayan sido dañados. Las Naciones Unidas determinarán el monto de la indemnización aplicando un criterio uniforme.

Parte IV

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 15

Firma

La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados.

Artículo 16

Ratificación

La presente Convención estará sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, depositario de la presente Convención.

Artículo 17

Adhesión

Todos los Estados podrán adherirse a la presente Convención. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 18

Entrada en vigor

La presente Convención entrará en vigor ... días después de que se hayan depositado ... instrumentos de ratificación o adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 19

Denuncia

Los Estados partes podrán denunciar la presente Convención mediante una notificación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 20

Textos auténticos

El original de la presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
